

**Asamblea General**

Distr. general
24 de septiembre de 2012

Original: español

Sexagésimo séptimo período de sesiones

Tema 45 del programa

Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands)

Carta de fecha 19 de septiembre de 2012 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de transmitir adjunta la respuesta del Gobierno argentino (véase el anexo) a la carta que le remitió el Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas, el 27 de enero de 2012 y distribuida como documento A/66/677, en respuesta al comunicado de prensa del 3 de enero de 2012 en ocasión del 179º aniversario de la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (A/66/653).

Le agradecería que tuviera a bien disponer que la presente nota y su anexo se distribuyan como documento de la Asamblea General en relación con el tema 45 del programa, relativo a la Cuestión de las Islas Malvinas.

(Firmado) Mateo **Estremé**
Encargado de Negocios interino



Anexo de la carta de fecha 19 de septiembre de 2012 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas

La República Argentina se dirige al Secretario General de las Naciones Unidas para referirse a la carta que le remitió el Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas el 27 de enero de 2012, que fue distribuida como documento A/66/677.

La República Argentina rechaza todas y cada una de las afirmaciones y omisiones contenidas en la referida nota por cuanto estas pretenden tergiversar y desvirtuar la verdad sobre los hechos históricos debidamente documentados.

El contenido de la nota británica es tan contradictorio que termina siendo un testimonio elocuente de lo insostenible que resulta la posición del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas. El único argumento que el Reino Unido intenta para justificar su posición es el principio de libre determinación de los pueblos. Es decir que pretende haber adquirido un derecho en razón de un principio que, según ese mismo país, se consagró en la Carta de las Naciones Unidas más de un siglo después de su invasión a las Islas Malvinas en 1833. La parte británica también acusa a la Argentina de no cumplir con el derecho internacional, pero lo hace luego de renegar por varias décadas del cumplimiento de su obligación de negociar una solución a la controversia sobre soberanía que existe entre los dos países respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

No hay manera de justificar, convalidar o pretender efecto lícito alguno del acto de usurpación británica cometido en 1833 sobre las Islas Malvinas, el cual desde el mismo momento de la invasión hasta la actualidad fue y es objeto de continuas y reiteradas protestas por parte de la República Argentina. La actitud británica de ignorar esta realidad pone de manifiesto, además, la evidente falta de certeza del Reino Unido respecto de los que considera sus derechos en la Cuestión de las Islas Malvinas, toda vez que, entre otros hechos, omite mencionar los 32 gobernadores españoles que fueron destacados a las Islas entre 1774 y 1811 y a los múltiples actos realizados por los gobiernos argentinos a partir de 1810, demostrativos de su soberanía sobre las islas. Todo ello sin que mediara protesta británica alguna. Por el contrario, la Argentina y el Reino Unido, en su condición de Estados soberanos, celebraron en 1825 un tratado de amistad, comercio y navegación. En ese momento la Argentina ejercía en forma pública y pacífica su soberanía sobre las Islas Malvinas, territorio que el Reino Unido reconoció como argentino y al que invadía ocho años más tarde.

La República Argentina lamenta que el Reino Unido, además de presentar argumentos inviables para justificar su posición, intente distorsionar la posición argentina en la disputa de soberanía y el alcance geográfico de esta última. Al respecto, la Argentina remite a las expresiones de su propia posición y recuerda que la Cuestión de las Islas Malvinas, como es entendida por las Naciones Unidas, comprende la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La cláusula de salvaguarda de soberanía, acordada por ambos Estados y aplicada en numerosos entendimientos bilaterales, importa un reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía

entre ambos países, así como del ámbito espacial de dicha disputa, que necesariamente incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La República Argentina rechaza además la pretensión del Reino Unido de enmascarar su conducta actual en cualquier interpretación posible del principio de libre determinación de los pueblos que, además, no parece ser el eje de las preocupaciones de ese país en otros escenarios incluso actuales. Jamás ese principio, que es una herramienta para la descolonización, podría ser alegado en favor de los colonos británicos que habitan las islas sin contradecir la esencia y la finalidad que el derecho concibió al reconocer ese principio. La pretensión británica de anteponer los deseos de su propia población, la que implantó en las islas, al cumplimiento del derecho internacional es una idea que se aparta de toda racionalidad y difícilmente podría ser interpretada como el resultado de un análisis de buena fe por parte de ese país sobre la situación en que se encuentra respecto de esta controversia. A mayor abundamiento, las Naciones Unidas se ha manifestado de forma contraria a la posición británica, caracterizando a la cuestión de las Islas Malvinas como un caso colonial especial y particular y solicitan desde hace más de 47 años que la misma sea resuelta mediante negociaciones entre las dos partes, la Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los isleños. Cabe recordar, además que la Asamblea General, en el año 1985, rechazó dos propuestas de enmienda británicas que pretendían introducir el principio de libre determinación en la resolución correspondiente de la Cuestión de las Islas Malvinas.

Las Naciones Unidas a través de las resoluciones núms. 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 de la Asamblea General, como también las resoluciones que anualmente adopta el Comité Especial de Descolonización, la última del 14 de junio de 2012, dan cuenta de ello al reconocer la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y a pedir que ambas partes la solucionen teniendo presentes los intereses de los habitantes de las islas.

La República Argentina reitera una vez más al Reino Unido, su compromiso a respetar los intereses de los isleños, reflejado en las salvaguardias y garantías ofrecidas a tal fin y negociadas, en el pasado, con el propio Reino Unido, así como su compromiso de orden constitucional a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas.

La República Argentina ve con preocupación que el Reino Unido persista en el desarrollo de actividades unilaterales en la zona disputada que son contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que haga referencia a un supuesto retiro de la cooperación argentina con el Reino Unido en diferentes temáticas vinculadas con el Atlántico Sur, cuando fueron precisamente esos actos unilaterales británicos los que impidieron la continuidad de la cooperación bilateral en dichas temáticas.

La Argentina recuerda que la cooperación en materia pesquera en el Atlántico Sur se ha visto imposibilitada por sucesivos actos unilaterales británicos, como el establecimiento de pretendidas jurisdicciones marítimas alrededor de las Islas Malvinas en 1986 y 1990, y alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en 1993, la venta de licencias de pesca desde 1987, el levantamiento unilateral en 1994 de la prohibición total temporaria de pesca estipulada en el área descrita en el anexo de la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990 y en el área al

oeste de aquella y la instauración en 2005 de un régimen de cuotificación de los recursos pesqueros en aguas circundantes a las Islas Malvinas, medida que constituye una forma de disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los espacios marítimos disputados.

En el mismo sentido, la Argentina recuerda que la decisión adoptada en 2007 de dar por terminada la Declaración Conjunta sobre Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental, obedeció a las reiteradas actividades unilaterales desarrolladas por el Reino Unido, contrarias a la mencionada Declaración, y tuvo lugar luego de un período de reflexión que se inició con el reconocimiento de uno y otro país sobre la existencia de una controversia interpretativa sobre el ámbito espacial de aplicación de esa Declaración.

En lo que concierne a la realización de vuelos chárter y al vuelo regular que semanalmente opera Lan Chile hacia las Islas Malvinas, invocado por el Reino Unido en su nota, la República Argentina recuerda que los vuelos chárter nunca estuvieron sujetos a acuerdo alguno y señala que el Gobierno británico omite considerar que la Argentina ha propuesto, en reiteradas oportunidades, al Gobierno británico revisar la situación actual en lo concerniente a comunicaciones aéreas entre la Argentina continental y las Islas Malvinas.

La República Argentina considera necesario aclarar que distintas medidas adoptadas en el ámbito de su jurisdicción interna responden a la necesidad de proteger los recursos renovables y no renovables que el Reino Unido parece proponerse explotar, sin importarle demasiado que ningún país del continente en que se encuentran esos recursos lo acepte como soberano indiscutido de esos archipiélagos. En este contexto, solo es razonable que la Argentina siga adoptando medidas orientadas a desalentar las actividades ilícitas de exploración y explotación de esos recursos. Dichas medidas han sido tomadas por la República Argentina en el ejercicio de sus derechos soberanos y de conformidad con el derecho internacional.

Resulta, asimismo, necesario aclarar que todos los compromisos adoptados por los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), constituyen una expresión de la voluntad soberana de todos y cada uno de los Estados que lo integran, los cuales guardan conformidad con el derecho internacional y con la legislación de cada uno de ellos. En este contexto, resulta necesario recordar que la medida que el Reino Unido invoca en su nota ha sido tomada respecto de una bandera que no es reconocida por la República Argentina, ni por ninguno de los países miembros del Mercosur.

Asimismo, desea reiterar que el Decreto 256/2010 es plenamente compatible con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y no es obstáculo a la libre navegación, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El Gobierno argentino reitera su invitación al Reino Unido a reanudar las negociaciones de conformidad con el mandato de las Naciones Unidas y los numerosos llamamientos de la comunidad internacional en tal sentido, a fin de alcanzar una solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Más aún, los argumentos planteados por el Reino Unido en la nota que se responde encontrarían

mejor ámbito de expresión en la reanudación de las negociaciones sobre soberanía entre los dos países la que el Reino Unido rehúsa desde hace más de 30 años.

La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
